

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos RIT O-194-2022, RUC 2240388463-8, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por sentencia de nueve de junio de dos mil veintidós, se dio lugar la demanda de cobro de prestaciones deducida por don Rubén Álvaro Silva Mora, don Víctor Galarce Fuentes y doña Erika del Carmen San Martín Campos en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas.

La demandada presentó recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante sentencia de seis de octubre de dos mil veintidós.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta consiste en determinar “*si a los demandantes les corresponde el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero del año 2022 en atención a lo dispuesto en el artículo 41 bis del DFL N°1 del año 1997 del Ministerio de Educación*”.

Para la demandada, los recurridos no tienen derecho a percibir los montos a que fue condenada, considerando que se trata de docentes titulares que no ejercieron labores transitorias, calidad requerida que hace procedente el pago de la retribución especial reglada en el citado artículo 41 bis, conclusión coherente con los dictámenes de la Contraloría General de la República que cita y el fallo de contraste acompañado, al que pide se homologue el impugnado.

Tercero: Que para la procedencia del recurso de unificación, es requisito fundamental que existan distintas interpretaciones respecto de una misma materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, por lo que se debe constatar si los establecidos



en el pronunciamiento recurrido, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados, son asimilables con los propuestos en los de contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte, se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance de la norma que resuelve la controversia, enfrentada a una situación equivalente en una sentencia anterior, decidida en términos contrapuestos, interpretación que dependerá del marco fáctico asentado en cada caso.

Cuarto: Que, en consecuencia, se deben consignar los hechos establecidos en la instancia:

Los demandantes, docentes que se desempeñaron como titulares en establecimientos de educación dependientes de la Municipalidad de Padre Las Casas, se acogieron al beneficio de retiro voluntario contemplado en el artículo 1 de la Ley N°20.976, renunciando a las horas que servían, por lo que la demandada puso a su disposición la respectiva bonificación, terminando la relación laboral el 31 de diciembre de 2021, en conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 3 de la citada ley, 4 de la Ley N°20.822 y 41 bis de la Ley N°19.070.

Quinto: Que, para la judicatura de la instancia, la discusión consiste en determinar la procedencia del pago a los demandantes de las remuneraciones de enero y febrero de 2022, en conformidad al artículo 41 bis de la Ley N°19.070, concluyendo que cumplen con tales supuestos, por cuanto sus contratos se encontraban vigentes a diciembre de 2021, desempeñándose como docentes titulares durante más de seis meses continuos para el mismo municipio, fundamentos suficientes para dar lugar a la demanda.

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada, por cuanto consideró acertada la interpretación dada por la judicatura de la instancia a tales preceptos, a los que dio el sentido y alcance previsto por la ley, sin advertir, como reclama la recurrente, su errada exégesis, por lo que estimó correcta la conclusión condenatoria impugnada.

Sexto: Que, para confrontar tal dictamen, la demandada presentó la sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol N°2.437-2013, de 8 de agosto de 2013.

En dicha resolución, luego de transcribir el artículo 41 bis de la Ley N°19.070, se consideró que *“la finalidad inmediata tenida en vista para instituir el beneficio de la prórroga de la relación laboral, para los docentes con contrato vigente al mes de diciembre y que tengan más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación municipal, no es otra que proteger el pago de los estipendios de los meses del período estival y evitar que*



se eluda el pago de remuneraciones de ese período”, agregando, a continuación, que “resulta claro que el artículo 41 bis del Estatuto Docente se refiere únicamente a los profesionales de la educación que se hayan incorporado a una dotación docente como contratados y no a aquellos que revisten la calidad de titulares, ya que sólo los primeros de los nombrados pueden verse expuestos a las particulares circunstancias que la norma señala”.

Séptimo: Que, de lo expuesto, se advierte que concurre el requisito de disparidad jurisprudencial exigido en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, relacionada con la correcta interpretación del artículo 41 bis de la Ley N°19.070, por lo que se debe esclarecer la procedencia de la prórroga remuneracional para los docentes titulares.

Octavo: Que las normas que se deben emplear para dilucidar la cuestión planteada, son aquéllas que se refieren al plan de retiro voluntario y la que contempla la prórroga del contrato por los meses de enero y febrero del año siguiente al de cese de la vinculación. De esta manera, resulta indispensable para establecer la tesis aplicable a la materia de derecho objeto del juicio, interpretar en forma conjunta las disposiciones que regulan los temas involucrados.

Por lo anterior, es preciso consignar que el artículo 3 de la Ley N°20.976, permite a los profesionales de la educación, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario prevista en la Ley N°20.822, estableciendo que: *“A los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro voluntario se les aplicará lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°20.822”;* disposición esta última que prescribe *“Los profesionales de la educación que, a las fechas señaladas en el artículo 2°, se encuentren en la situación descrita en los artículos 41 bis u 82 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período en que estas últimas disposiciones señalan”.* Finalmente, el citado artículo 41 bis, señala: *“Los profesionales de la educación con contrato vigente al 1 de diciembre, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal y Servicios Locales de Educación Pública”.*

Noveno: Que, tal como se advierte, la ley en la materia que se revisa no distingue entre profesionales de la educación titulares o contratados. En efecto, las disposiciones transcritas previeron que tanto la bonificación por retiro voluntario como la prórroga de la relación laboral, y el pago de las remuneraciones de enero



y febrero del año respectivo, rigen para los profesionales de la educación que durante diciembre de la anualidad anterior pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, ya sea en calidad de titulares o contratados, y reúnan los presupuestos descritos.

En otras palabras, del tenor literal de la normativa transcrita, en lo pertinente a la bonificación por retiro voluntario y al pago de enero y febrero, fluye que la remisión hecha en la Ley N°20.822 al artículo 41 bis del Estatuto Docente, fue para establecer los beneficios aludidos para los profesionales de la educación, sin diferenciar la calidad en que se incorporaron a la respectiva dotación docente.

Décimo: Que sostener lo contrario, vale decir, que el beneficio de la prórroga se concede únicamente a los profesionales de la educación que se acojan al retiro voluntario y ostenten la calidad de contratados, importa una discriminación sin sustento legal, no sólo porque efectuar tal diferenciación implica vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley, sino porque supone mejorar la condición del contratado por sobre la del titular, sin un fundamento o justificación razonable, generando, de este modo, un contrasentido inaceptable en la labor de interpretación de la ley, que, además, contradice su dilucidación conforme a los principios que informan al derecho del trabajo, en especial, el *pro operario*.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, la materia de derecho propuesta por la recurrente constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no existen diferentes interpretaciones, puesto que la sentencia impugnada se ajustó al modo en que el asunto ha sido resuelto por esta Corte en las sentencias dictadas en los autos Rol N°2.540-2014, 10.614-2014, 29.551-2014 y 95.176-2016, sin que se aportaran nuevos antecedentes en los términos del artículo 483-A del Código del Trabajo que conduzcan a un reestudio e interpretación que permita una nueva concepción de la materia.

Duodécimo: Que, de esta manera, si bien se constata la disparidad jurisprudencial denunciada por la recurrente, en cuanto a la interpretación y aplicación dada a los preceptos referidos en el fallo impugnado y el acompañado como medio de contraste, no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía del presente recurso, invalide la sentencia de nulidad y altere lo decidido, por cuanto los razonamientos que contiene para acoger la pretensión de los demandantes se ajustaron a derecho, por lo que el arbitrio intentado será desestimado.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la



sentencia de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°138.857-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y el abogado integrante señor Ricardo Abuaud D. No firma el ministro señor Simpertigue y el abogado integrante señor Abuaud, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.



En Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

